

EL DESAFÍO DEL ESPAÑOL EN EL CARIBE ANGLÓFONO: OPORTUNIDADES, OBSTÁCULOS Y ESTRATEGIAS EN CONSTRUCCIÓN

David Fernández Vítóres

Universidad de Alcalá

En los últimos años, se ha prestado especial atención al Caribe anglófono como un nicho posible para la expansión del español. Ahí están las declaraciones reiteradas del propio Secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo según las cuales habría dos razones principales para identificar esta región como prioritaria. La primera es que se trata de un conjunto de quince países que normalmente votan en bloque en Naciones Unidas cada vez que hay una candidatura, por ejemplo, para ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad. La segunda es que, al parecer, a estos países les resultaría muy útil para ampliar sus horizontes turísticos y empresariales en la región, dada la alta demanda de este idioma.

Independientemente del grado de solidez de estos motivos, el éxito de una empresa tal requeriría dar respuesta a algunas incógnitas que aún quedan por despejar. La primera tiene que ver con el propio concepto de partida: ¿por qué el Caribe anglófono? ¿Por qué no el Caribe francés o el neerlandés? ¿No merecerían los países francoparlantes o aquellos en los que se habla neerlandés la misma consideración, habida cuenta de que, en el caso del francés, presentan además una afinidad lingüística mayor con el español? ¿Por qué no agruparlos a todos entonces bajo la etiqueta única de *Caribe no hispánico*?

Pero incluso admitiendo el voto en bloque en la ONU de los distintos territorios anglófonos como un criterio de unidad válido, esta última solo haría referencia a su visibilidad internacional, pues la diversidad que presentan en los planos demográfico, social, lingüístico y económico es aún considerable y supone, de hecho, un lastre para el diseño y la puesta en marcha de cualquier estrategia consensuada de promoción del español de cierto alcance. ¡Pasemos revista!

El Caribe anglófono está integrado por un conjunto de 15 países y territorios en los que el inglés es el idioma oficial o predominante. Esto incluye a 10 Estados soberanos —Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Bahamas, Granada, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y Dominica—, y a otros 5 territorios británicos de ultramar —Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Anguila y Montserrat—.

Aunque, en principio, la heterogeneidad política de estos territorios no debería suponer un obstáculo para llegar a un acuerdo en materia lingüística, sus diferencias demográficas sí parecen ser un factor importante: no es lo mismo diseñar estrategias para promocionar el español en una isla como Monserrat, con unos 6.000 habitantes, que hacerlo en Jamaica, la isla más poblada de ese grupo con diferencia, con 2,8 millones. En cualquier caso, estaríamos hablando de un público objetivo bastante reducido, pues la población total combinada del Caribe anglófono apenas llega a los 6 millones de personas, dato que en sí mismo rebaja considerablemente las expectativas de impacto de una hipotética estrategia en esta zona del planeta.

Otro freno importante para el desarrollo de cualquier política en este sentido es la diferencia entre las rentas per cápita entre los distintos países, pues condiciona en gran medida las preferencias y necesidades de cada uno de ellos en materia educativa. El PIB per cápita de Jamaica, por ejemplo, rondaba en 2021 los 5.500 dólares, mientras que el de las

Islas Caimán superaba los 65.000. A ello hay que añadir las fuertes diferencias en lo que a sus fuentes de riqueza se refiere: turismo, agricultura y minería en el primero y servicios financieros en el segundo. De hecho, estos últimos han moldeado, siquiera formalmente, el perfil sociodemográfico de algunos de estos territorios. En Barbados o las islas Caimán, la escasa población autóctona, inicialmente pobre, se ha visto sustancialmente incrementada por otra extranjera y rica atraída por las ventajas que para el establecimiento de sus empresas ofrecía su condición de paraísos fiscales. A las diferencias económicas entre los distintos estados habría que sumar también las que se producen dentro de estos. Aunque casi todos los países que integran el Caribe anglófono están clasificados como de ingresos medios, esta situación enmascara los importantes desafíos sociales y económicos que aún enfrentan en materia de igualdad y de pobreza intergeneracional.

Todos estos problemas conviene enmarcarlos además en un contexto no menos importante para el asunto que nos atañe: la situación lingüística peculiar que caracteriza a muchos de estos territorios. Aunque en la mayoría de ellos el inglés es la lengua generalmente utilizada en la educación, los medios de comunicación y la administración pública, en muchos subsiste aún una situación de diglosia o bilingüismo. Los criollos jamaicano, trinitense o caimanés son buena muestra de ello. Cuando hablamos de introducir el español en estos territorios, por tanto, no estamos hablando de añadir una segunda lengua, sino más bien una tercera. Por otra parte, el español tendría que abrirse camino ante un competidor de envergadura: el inglés. ¿Por qué habría de aprender español un jamaicano o un triniteño cuando su lengua oficial y, en muchos casos, principal ya es la lengua franca mundial? Conocida es la desidia hacia el aprendizaje de segundas lenguas que se observa en los principales países anglófonos, como EE. UU., Reino Unido o Australia. ¿Por qué esta habría de ser menor en el Caribe? Ni la estructura de los

sistemas educativos de estos territorios ni su dotación presupuestaria invitan a pensar en un esfuerzo mayor por su parte hacia el aprendizaje del español. De hecho, aunque esta región lleva ya casi una década en el punto de mira como objetivo estratégico para la difusión del español, la atención institucional que ha recibido el español en estos territorios ha sido tan tibia como la del propio mar que los une.

El único país de la región que ha mostrado un interés explícito por implantar el español en su sistema educativo ha sido hasta el momento Trinidad y Tobago. Situada cerca de la costa de Venezuela, esta pequeña nación insular es geográficamente sudamericana, pero culturalmente caribeña. A pesar de la colonización por diversas potencias europeas, los años de dominio británico y la consiguiente implantación del inglés como lengua oficial han hecho que la rica herencia étnica y cultural del país no se vea actualmente reflejada en una diversidad lingüística equivalente. Dada la posición natural del país como puente entre el mundo de habla inglesa caribeño y el de habla hispana, el gobierno trinitense lanzó en 2005 la iniciativa denominada «El Español como el Primer Idioma Extranjero» (SAFFL, por sus siglas en inglés), con la intención de fortalecer sus vínculos comerciales con América Latina mediante el aumento del uso de esta lengua en el sistema educativo, la administración pública y la sociedad en general.

Casi 18 años después de su puesta en marcha, puede decirse que el éxito de esta iniciativa ha sido limitado, incluso ha llegado a til darse de poco realista. De hecho, después del intento fallido del país de albergar la sede del Área de Libre Comercio de las Américas, SAFFL fue perdiendo fuelle y desplazando su enfoque económico inicial hacia el educativo, como muestra el cambio de su ubicación original en el Ministerio de Comercio e Industria al de Educación. A su consolidación tampoco ayudó la crisis financiera internacional de 2008, que

afectó en gran medida a Trinidad y Tobago, con una significativa contracción de la inversión extranjera directa provocada por la abrupta caída en el precio de los hidrocarburos. Este deterioro de la economía nacional e internacional también se reflejó en una mayor inestabilidad económica en la vecina Venezuela, donde la situación aún continúa siendo preocupante.

Independientemente del éxito o fracaso de esta medida, es preciso reconocer que esta no es el resultado de una política pública diseñada desde un país del área hispánica, sino que ha salido del propio gobierno insular. Venezuela, quizás el país más beneficiado por la aplicación de esta medida, no parece estar en su mejor momento para lanzar políticas de este tipo fuera de sus fronteras. En este sentido, bien está que, desde España, se intente animar y vehicular esta demanda del español, como muestra la visita en 2009 del Monarca español. Pero de ahí a pensar que esta medida es el resultado de una acción diplomática hay un abismo que es difícil salvar.

Por otra parte, es probable que en la actualidad la inmigración tenga una repercusión mayor en la difusión del español en Trinidad y Tobago que cualquier tipo de iniciativa institucional. Situado a unas ocho millas náuticas al este de Venezuela, este país caribeño ha sido el más afectado en términos numéricos por la migración procedente de este país. Con una población de 1,3 millones, alberga hoy día a unos 40.000 venezolanos, el mayor número de estos migrantes en la región. Se trata, además, del primer país caribeño en otorgar reconocimiento legal a los ciudadanos venezolanos que huyen de las terribles circunstancias económicas, sociales y políticas de su país, como se desprende de la regularización masiva llevada a cabo en 2019.

Puede decirse, en definitiva, que el interés institucional por el Caribe anglófono es más una declaración de intenciones que un planteamiento estratégico propiamente dicho.

Cierto es que el español se abre camino en esta área geográfica al abrigo de organizaciones regionales como Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Secretaría General Iberoamericana o incluso Petrocaribe, pero de ahí a pensar que puede existir cierta unidad estratégica en el mundo hispánico en lo que a la promoción del español se refiere parece algo descabellado. La acción individual de los países de habla hispana también resulta compleja, pues el alcance de cualquier propuesta se ve dificultado por cuestiones evidentes, como el tamaño de los distintos estados que integran este espacio, su carácter insular o sus diferencias sociales, económicas y lingüísticas.